



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/WG.6/2/ROM/3
3 de abril de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Segundo período de sesiones
Ginebra, 5 a 16 de mayo de 2008

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA
LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c) DEL ANEXO
DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

Rumania*

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones presentadas por 18 interlocutores¹ para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. Como la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal, la información recogida en este informe se refiere principalmente a hechos ocurridos después del 1º de enero de 2004.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES Y MARCO

A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. Amnistía Internacional pidió a Rumania que firmase y ratificase la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y que ratificase el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes².

B. Marco constitucional y legislativo

2. En 2005 el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa afirmó que se habían adoptado nuevas medidas legislativas, institucionales y prácticas para fortalecer la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales en esferas como la no discriminación, el uso de idiomas minoritarios en la vida pública, así como en la educación, en las que se ha prestado una atención especial a la situación de los romaníes, aunque no siempre se garantizan los recursos financieros necesarios³. Amnistía Internacional mencionó que la Ley para la prevención y la sanción de todas las formas de discriminación fue reformada en junio de 2006 para adecuarla a la directiva sobre igualdad racial de la Unión Europea. Sin embargo, a principios de febrero de 2008 el Parlamento aún no había aprobado el proyecto de ley sobre la protección de las minorías étnicas.

C. Estructura institucional y de derechos humanos

3. El Centro Romaní para la Intervención y los Estudios Sociales (RCRISS) señaló que se había creado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, un organismo público autónomo encargado de aplicar las disposiciones del derecho rumano en materia de discriminación⁴. Según Save the Children Rumania, el país todavía no tiene un defensor del niño. En la Oficina del Defensor del Niño hay un defensor del pueblo adjunto encargado de los derechos del niño, la familia, la juventud, las personas de edad y las personas discapacitadas. El número de reclamaciones recibidas y de intervenciones llevadas a cabo por iniciativa propia en relación con los derechos del niño es sumamente bajo debido a la falta de información, sobre todo información sobre la existencia y la función de esta institución⁵. Aldeas Infantiles-SOS Rumania añadió que son dos los organismos públicos que se encargan de supervisar la información sobre los niños con discapacidad. Esos dos organismos funcionan en base a definiciones distintas del concepto de "discapacidad"⁶.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

4. Amnistía Internacional pidió a Rumania que presentase sin mayor dilación todos los informes que aún no había presentado al Comité contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁷.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

5. El RCRISS señaló que en los últimos años Rumania ha realizado progresos importantes en materia de no discriminación. Al respecto, el Gobierno aprobó la Ordenanza N° 137/2000 "sobre la prevención y la sanción de todas las formas de discriminación", por la que se prohíben todas las formas de discriminación⁸. El Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales observó en 2005 que resultaban necesarias nuevas medidas para mejorar la situación de la aplicación de la legislación contra la discriminación y promover su conocimiento por los ciudadanos y una mayor tolerancia, especialmente en relación con la igualdad plena y efectiva de los romaníes⁹. En 2006, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) observó que la legislación de lucha contra la discriminación no se aplicaba y que ni los funcionarios públicos ni los ciudadanos tenían conocimiento de esa legislación o de la existencia del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, que es el organismo creado para su aplicación. La ECRI recomendó a las autoridades rumanas que tomaran medidas para aplicar cabalmente la legislación de lucha contra la discriminación y proporcionasen al Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación recursos suficientes para desempeñar sus funciones. La ECRI también pidió a las autoridades rumanas que aplicasen las disposiciones del Código Penal relativas al odio racial y la intolerancia¹⁰.

6. Amnistía Internacional observó que, pese al compromiso contraído en 2005 por Rumania en relación con el Decenio para la integración de los romaníes, éstos seguían siendo discriminados por los funcionarios públicos y los particulares¹¹. El Comité Consultivo del Convenio Marco afirmó que la situación social y económica de los romaníes seguía siendo problemática, por lo que se necesitaban más esfuerzos, en particular de carácter financiero, para poner remedio a las manifestaciones de discriminación y las dificultades a las que aún seguían enfrentándose los romaníes en las esferas del empleo, la vivienda, la salud y la educación¹². El RCRISS recomendó al Gobierno que velase por la efectividad de la protección jurídica contra la segregación racial y pusiese fin a la separación de las comunidades romaníes de las no romaníes mediante muros u otras barreras físicas¹³.

7. El RCRISS observó que, pese al marco jurídico vigente, no se había avanzado mucho en cuanto a las actitudes de los representantes de las instituciones públicas con respecto a la minoría romaní. Todavía se registraban casos graves de abusos contra los romaníes cometidos por agentes de las fuerzas del orden, abusos que las autoridades del Estado con frecuencia consideraban ilícitos¹⁴.

8. El RCRISS sostuvo que persistía la discriminación contra los miembros de la comunidad romaní en el sistema de justicia de Rumania. Algunos tribunales parecen tener prejuicios contra los romaníes y albergan estereotipos sobre ellos. Según el RCRISS, hay jueces, fiscales y abogados que no están plenamente conscientes de la legislación contra la discriminación. El RCRISS señaló que en su propuesta el Instituto Nacional Judicial iba a incluir cursos sobre la legislación de lucha contra la discriminación en los planes de estudios para la formación continua de los jueces¹⁵.

9. El RCRISS afirmó que en Rumania seguían siendo corrientes los prejuicios, los estereotipos y el odio racial contra los romaníes. La opinión pública está muy influida por los medios de comunicación y por las opiniones expresadas por personas de la vida pública rumana¹⁶. En 2005 el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales afirmó que seguían siendo limitados los efectos de las medidas de sensibilización adoptadas para mejorar la

imagen pública de los romaníes y alentar una actitud más positiva hacia esta comunidad en la sociedad. En determinados medios, así como las declaraciones formuladas por determinados miembros de los poderes públicos y, pese a las mejoras en esta esfera, en la conducta de determinados funcionarios policiales siguen observándose manifestaciones públicas de hostilidad e intolerancia¹⁷. Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la manera negativa en que se retrataba a los romaníes en los medios de comunicación de Rumania y en los discursos pronunciados por políticos de alto nivel¹⁸. Amnistía Internacional recomendó a Rumania que velara por que sus funcionarios se abstuvieran de hacer declaraciones públicas que pudiesen interpretarse como un acto que fomentase la discriminación contra determinadas personas o la selectividad en el trato basada en su origen étnico y velasen por que se pusiese remedio con eficacia a las manifestaciones de racismo e intolerancia racial en los medios de comunicación del país. También recomendó al Gobierno que capacitase a la policía, a las fiscalías y a la judicatura para atender adecuadamente las denuncias de delitos por motivos raciales¹⁹.

10. La Asociación para la defensa de los pueblos amenazados (STP) citó un estudio de 2007 del Open Society Institute, en el que se indicaba que entre el 20 y el 30% de los romaníes no estaban en posesión de un certificado de nacimiento ni de tarjetas de identidad. La STP observó que era probable que el número de romaníes no inscritos oficialmente en el registro fuese mucho mayor²⁰. Save the Children Rumania señaló que no existían datos estadísticos oficiales sobre esta cuestión. Añadió que los casos de niños indocumentados afectaban principalmente al grupo étnico de los romaníes o a la categoría de los niños de la calle²¹. La Sociedad Independiente de Derechos Humanos de Rumania (SIRDO) observó que los niños indocumentados fácilmente podían ser víctimas de adopciones ilícitas o de trata de seres humanos²². La ECRI insistió en la necesidad de encontrar rápidamente una solución al problema de los romaníes sin documentos de identidad²³.

11. Según la Organización Human Rights Watch (HRW), los pacientes que viven con el VIH tienen que hacer frente a la discriminación en el acceso a los servicios médicos necesarios y hay médicos que a menudo se niegan a tratarlos. La vulneración de la confidencialidad de la identidad de las personas con VIH es corriente y rara vez sancionada²⁴. HRW añadió que el derecho rumano obliga a que se practique una prueba médica en el caso de numerosos empleos en los que es mínimo el riesgo de transmisión del VIH, como el caso de los empleados de peluquerías, de servicios de estética y manicura, los cuidadores de niños, el personal médico, los empleados de servicios de alimentación y el personal de limpieza del sector turístico. Algunos empleadores y médicos también obligan a llevar a cabo una prueba del VIH para puestos de trabajo en los que no es obligatorio²⁵. HRW recomendó a Rumania que pusiese fin a las pruebas obligatorias del VIH como condición de empleo y velase por que no se impida innecesariamente a las personas que viven con el VIH trabajar o asistir a un centro de formación profesional²⁶. HRW observó que, en los pocos casos en los que intervino el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación que afectaban a personas que viven con el VIH, su actuación se limitó a mediar en el caso de niños expulsados de centros escolares o imponer multas nominales que se abonan al Gobierno y no a la víctima²⁷.

12. Según la organización ACCEPT, la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC) y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas-Región Europea (ILGA), entre los motivos de no discriminación en la legislación contra la discriminación figuraba la orientación sexual, aunque no la identidad y la expresión de género, y en la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se contempla la condición de transgénero. ACCEPT, IGLHRC e ILGA añadieron que el Gobierno debería proteger el derecho al trabajo y adoptar medidas para combatir la discriminación -incluida la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad y la expresión de género- en el caso de los docentes y otras personas que trabajan en los sectores de la educación y la salud. ACCEPT, IGLHRC e ILGA también recomendaron que los funcionarios de las administraciones locales y la administración central emprendiesen campañas de

educación pública contra los prejuicios subyacentes en la violencia por la orientación sexual y la identidad de género y velasen por que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales pudiesen gozar de sus derechos en un clima que no esté dominado por el temor, la violencia y la homofobia²⁸.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

13. Amnistía Internacional afirmó que, pese a algunas modificaciones y reformas positivas de la legislación, seguía recibiendo numerosas denuncias de malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden de Rumania. Según las informaciones, muchas de las víctimas de malos tratos y del uso ilícito de armas de fuego por agentes de policía pertenecen a la comunidad romaní. Entre 2004 y 2006, varios de los casos denunciados se referían al fallecimiento de personas o a heridas graves. Amnistía Internacional observó que el uso de armas de fuego por la policía en circunstancias poco claras es una cuestión que desde hace mucho tiempo suscita preocupación a las autoridades rumanas que no han podido resolverla de manera eficaz mediante una investigación imparcial y exhaustiva²⁹.

14. El RCRISS observó que a menudo, cuando la policía intervenía en las comunidades romaníes, hacía un uso desproporcionado de la fuerza. El número de policías y gendarmes es exagerado para el número de miembros de la comunidad o, especialmente, en comparación con acciones similares de la policía en comunidades no romaníes. Los actos de tortura, violencia y abuso de las fuerzas del orden afectan desproporcionadamente a los romaníes, principalmente por los prejuicios y estereotipos de los agentes en relación con los romaníes y por el poco conocimiento de la ley que tienen éstos³⁰.

15. La SIRDO señaló que el peor fenómeno que afecta a la vida de la mujer en Rumania eran la discriminación y la violencia (la violencia doméstica, la trata de blancas, la prostitución, la pornografía y la violencia contra la mujer a través de los medios de comunicación), en particular, la discriminación y la violencia contra la mujer en las zonas rurales. Recomendó que Rumania modificase la Ley N° 217/2003 sobre la prevención de la violencia doméstica para corregir sus deficiencias, se concediesen suficientes recursos presupuestarios para organizar albergues para las víctimas y se creasen tribunales especializados para casos de violencia doméstica³¹. En 2002 el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa también recomendó a Rumania que prestase una mayor protección y asistencia a las víctimas de la violencia doméstica aplicando cabalmente las disposiciones del Código Penal y creando albergues³².

16. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el internamiento, las condiciones de vida y el tratamiento de pacientes en muchos pabellones psiquiátricos y hospitales, pues violan las normas internacionales de derechos humanos. En 2004 denunció la práctica de someter a personas a un tratamiento psiquiátrico sin su consentimiento y sin motivos médicos y las condiciones deplorables en las que se encontraban. Amnistía Internacional añadió que en 2004, según las informaciones, 18 pacientes habían fallecido en un hospital de Poiana Mare, la mayoría de ellos por malnutrición e hipotermia. Pese a las pruebas que indicaban que los fallecimientos habían tenido lugar en circunstancias sospechosas en febrero de 2005, el Fiscal General de Rumania decidió archivar la causa de los fallecimientos en Poiana Mare, pues a su juicio no había quedado acreditada la relación entre los fallecimientos y el trato dispensado por el personal a los pacientes. Amnistía Internacional informó que se había presentado una queja para pedir que se volviese a abrir el caso³³. El CLR señaló que un problema recurrente en este tipo de instituciones era la falta de procedimientos claros para que las personas internadas puedan presentar una queja o una petición a las autoridades³⁴.

17. Amnistía Internacional señaló que en la investigación llevada a cabo por la Misión de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) sobre la muerte de dos personas y las lesiones graves sufridas por otra durante una manifestación el 10 de febrero de 2007 en Pristina (Kosovo) se estableció que los fallecimientos y las lesiones fueron resultado del uso incorrecto de balas de goma caducas por agentes del destacamento de policía rumano. Once agentes rumanos de la Unidad Especial de Policía, que al parecer estaban en posesión de información crucial para la investigación y que previamente habían sido interrogados como testigos por los investigadores, fueron repatriados desde Kosovo el 21 de marzo de 2007. En julio de 2007, las autoridades rumanas informaron a Amnistía Internacional que se había abierto una investigación penal a cargo de un fiscal militar en Rumania³⁵.

18. SCR destacó que las estadísticas proporcionadas por la Administración Penitenciaria de Rumania y el Ministerio de Justicia mostraban que casi el 45% del total de niños privados de libertad se encontraban en dependencias policiales o en centros penitenciarios. El artículo 57 del Código Penal dispone que los menores condenados a internamiento cumplan su pena separados de los presos adultos o en lugares especiales de internamiento, pudiendo proseguir con la enseñanza obligatoria y adquirir una capacitación profesional según sus aptitudes. No obstante, durante el internamiento preventivo que puede durar algunos meses, los niños no pueden hacer ningún tipo de estudios ni recibir capacitación profesional³⁶. SCR añadió que la nueva Ley de organización judicial era regresiva desde el punto de vista de la justicia de menores, pues sustituía la obligación de crear tribunales de la familia y tribunales de menores especializados por la posibilidad de constituirlos a discreción de los presidentes de los tribunales³⁷.

19. Save the Children Rumania observó que, aunque el Gobierno de Rumania ha creado el marco institucional y legislativo para prevenir y luchar contra el abuso y la trata de niños, la aplicación de esas medidas era lenta. Un estudio realizado en 2005 muestra que el 8,5% de las trabajadoras sexuales entrevistadas al llevar a cabo la investigación eran menores de edad y el 20% de ellas había pasado una parte de su infancia en instituciones de protección infantil. Además, el 45% de ellas declararon que habían sido vendidas o compradas, frente al 24,5% de las muchachas que nunca habían sido internadas en una de estas instituciones³⁸.

20. ACCEPT, IGLRHC e ILGA observaron que ACCEPT ha recibido varias quejas de personas encarceladas consideradas como homosexuales o transgénero y que como tales eran víctimas de violación, agresiones físicas y trato degradante por otros reclusos. Sin embargo, cuando esos reclusos se quejaban, las autoridades de la prisión rara vez tomaban inmediatamente medidas para garantizar su seguridad o para enjuiciar a los autores. Las organizaciones ACCEPT, IGLRHC e ILGA recomendaron al Ministerio de Justicia y a la Administración Penitenciaria que para prevenir los abusos en las cárceles organicen sistemáticamente actividades de educación en materia de derechos humanos, orientación sexual y cuestiones de identidad de género para los funcionarios de prisiones. El centro penitenciario debe atender con diligencia las quejas para garantizar la seguridad de los reclusos y evitar que sigan siendo víctimas de esos actos y debe denunciar a los autores a la fiscalía³⁹.

3. Administración de justicia y estado de derecho

21. El RCRIS observó que muchos casos de malos tratos o de brutalidad policial no se investigaban como es debido y quedaban impunes. Se intimidaba a las personas involucradas (víctimas y testigos), los expertos (como los médicos forenses) y los activistas en pro de los derechos humanos. Añadió que los mecanismos para garantizar la impunidad abarcan, por una parte, la presión a personas involucradas para que no testifiquen ante los tribunales o para que no entablen las acciones necesarias y, por otra, una investigación penal que permita decidir no enjuiciar

los casos. No prosperó ninguna de las acciones interpuestas ante los juzgados rumanos por el RCRISS contra agentes de las fuerzas del orden por conducta ilícita con resultado de lesiones físicas e incluso muerte. El RCRISS señaló que a la sazón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendía en dos de esas causas⁴⁰.

22. La Fundación y la Asociación de Antiguos Presos Políticos (ICAR) observaron que en diciembre de 2006 Rumania reconoció oficialmente el alcance nacional de las violaciones manifiestas de derechos humanos cometidas en los 45 años de régimen comunista y públicamente pidió disculpas a las víctimas supervivientes y a sus familiares. Sin embargo, hasta ahora Rumania no ha conseguido vencer la impunidad ni enjuiciar a ningún autor de violaciones de los derechos humanos en ese entonces⁴¹. La ICAR destacó la necesidad de crear una comisión de la verdad con el mandato de identificar y dar a conocer a los autores de violaciones de los derechos humanos⁴².

4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar

23. SCR señaló que se había producido una migración masiva de rumanos a otros países europeos. Este fenómeno es característico sobre todo de las zonas pobres del país, en donde grandes comunidades migran al extranjero, dejando tras de sí un número elevado de niños a cargo de sus abuelos, de otros parientes e incluso de nadie. Según SCR, en junio de 2007 el organismo nacional para la protección de los derechos del niño informó que al menos 82.464 niños habían sido dejados al cuidado de uno o de ningún progenitor para salir del país en busca de empleo⁴³. La SIRDO señaló que no existía una política nacional coherente en la materia, pese a los casos de suicidio registrados entre niños que habían sido abandonados en un entorno familiar precario o sin estar a cargo de ningún adulto⁴⁴.

24. Las organizaciones ACCEPT, IGLHRC e ILGA instaron a que se aprobase una legislación que reconociese la relación de pareja, independientemente del sexo de sus miembros⁴⁵.

5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

25. Según el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, la situación de la libertad de los medios de comunicación en Rumania mejoró en los últimos años en el contexto del proceso de adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, seguía sin ser transparente el flujo de fondos dedicados a la publicidad de instituciones públicas en los medios tanto nacionales como regionales. El Representante señaló que se temía que los fondos públicos se utilizasen para apoyar a medios de difusión afines al Gobierno. También era motivo de preocupación la independencia del ente público de radiodifusión⁴⁶.

26. Según el Instituto de Religión y Política Pública (IRPP), la situación jurídica de la libertad religiosa en Rumania no es buena. Pese a la inmensa oposición nacional e internacional a una ley de religión restrictiva y discriminatoria, el texto legislativo fue aprobado el 27 de diciembre de 2006. En virtud de la nueva ley, goza de mayores derechos la categoría de "denominaciones religiosas reconocidas", que según el IRPP resulta imposible obtener para algunas religiones⁴⁷. Según la Organización Human Rights Without Frontiers (HRWF), la nueva ley favorece a la Iglesia Ortodoxa Rumana y a otras grandes iglesias reconocidas como religiones y discrimina a las religiones extranjeras⁴⁸.

27. El IRPP señaló que en Rumania las nuevas comunidades religiosas de menos de 300 miembros no tendrían derecho a adquirir bienes, construir lugares de culto, proteger sus derechos en actuaciones judiciales, tener haberes o remunerar a su personal o su clero⁴⁹. HRWF añadió que en virtud de la nueva ley se exigía a las religiones abstenerse de formular declaraciones sobre las religiones mayoritarias y se establecía que los cementerios quedan bajo el control de las religiones reconocidas⁵⁰. El IRPP señaló que el Gobierno de Rumania no había observado sus obligaciones de proteger a las comunidades religiosas minoritarias contra el hostigamiento y la intimidación de la población mayoritaria del país. El IRPP añadió que el Gobierno de Rumania no había velado por la restitución íntegra de los bienes religiosos, en particular de las iglesias católicas de rito griego, desde la caída del régimen de Ceaușescu⁵¹.

28. Amnistía Internacional señaló que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Rumania seguía siendo víctima de discriminación por la identidad. La Iglesia Ortodoxa y las autoridades locales se han opuesto en varias oportunidades a la celebración del desfile de la denominada "Gayfest", que esa comunidad organiza cada año en mayo o junio. Los participantes en el desfile han sido atacados por contramanifestantes, que les arrojan huevos, piedras y botellas de plástico, por lo que la policía ha tenido que intervenir⁵². Según ACCEPT, IGLHRC e ILGA, junto con una protección policial efectiva durante el desfile, es necesario que la policía dé curso a las denuncias de actos de violencia⁵³.

6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

29. Según la Confederación Sindical Internacional(CSI), Rumania es un país en que escasea la mano de obra debido al éxodo de obreros rumanos a Europa occidental. Esta escasez de trabajadores a veces la suplen trabajadores asiáticos que aceptan salarios bajos y malas condiciones de trabajo. No hay estadísticas sobre los salarios que se pagan a los extranjeros que trabajan en Rumania. Según la legislación nacional, los empleadores están obligados a pagar el salario mínimo, al igual que a los trabajadores rumanos⁵⁴. La CSI afirmó que no se aplicaba eficazmente la legislación rumana en materia de migración laboral y que muchos empleadores recurrían a prácticas de contratación no oficiales y a formas de empleo no reguladas, lo que dejaba a los trabajadores migratorios vulnerables a la explotación. La CSI citó informes en que se señala que los salarios pagados a las trabajadoras migratorias en el sector textil son el 70% aproximadamente del salario mínimo establecido por ley⁵⁵. SCR añadió que, pese a la frecuencia de los casos de trabajo infantil, los datos de que disponía confirmaban que en el año 2005 nadie fue acusado ni condenado por vulnerar las leyes que prohíben el trabajo infantil. Según un informe sobre el trabajo infantil en Rumania, realizado en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística, el número de niños afectados por las peores formas de trabajo en las zonas urbanas y rurales era de 70.000 aproximadamente⁵⁶.

7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

30. Aldeas Infantiles-SOS de Rumania afirmó que, pese al mayor compromiso político nacional y la presión política internacional, la situación de los niños discapacitados en el país no había mejorado en el último decenio. Por el contrario, los niños discapacitados corren un riesgo cada vez mayor de ser abandonados e internados en una institución, haciendo caso omiso de sus derechos y sus posibilidades de desarrollo. A menudo no se tiene en cuenta a los niños discapacitados, se les excluye (o incluso se los esconde) y siguen siendo considerados niños con "necesidades especiales" y no derechohabientes. Unos 10.000 niños discapacitados no están al cuidado de sus padres: el 70% de ellos están internados en centros de acogimiento públicos o privados y el 30% son acogidos por familias⁵⁷.

31. SCR señaló que se había registrado una reducción del número de niños discapacitados internados en instituciones, aunque seguía siendo insuficiente el acceso a la atención para la recuperación de niños nacidos en las zonas rurales. También lamentó la falta de los denominados "centros de reposo", que permiten a los padres de familia tomar un poco de descanso⁵⁸. Aldeas Infantiles-SOS de Rumania señaló que muchos niños discapacitados, especialmente los más expuestos al descuido y al abandono debido a su "invisibilidad" social, no estaban acreditados como tales por las autoridades locales. La falta de una acreditación oficial priva a los niños y a sus cuidadores de todo tipo de apoyo, que en muchos casos contribuiría enormemente a mejorar sus condiciones de vida⁵⁹.

32. La SIRDO destacó que el abandono de los recién nacidos en hospitales era un fenómeno que aún persistía en Rumania⁶⁰. En cuanto a los niños abandonados, en 2002 el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó a Rumania que procediese al cierre de las instituciones obsoletas, que se adoptasen programas de atención para ayudar a la integración social de los jóvenes que abandonan esas instituciones, que formulase una política para prevenir el abandono de niños que contemple campañas de sensibilización y educación, y que examinase la posibilidad de crear centros de acogida para madres⁶¹. Aldeas Infantiles-SOS de Rumania observó que a los 18 años los niños volvían al seno de su familia (muy frecuentemente la familia que los abandonó) o eran internados en instituciones para adultos discapacitados⁶². SCR afirmó que era necesario aplicar estrategias coherentes durante el período de institucionalización a fin de que los jóvenes pudiesen adaptarse a las exigencias de una vida autónoma y paliar la conmoción que supone su salida de una institución⁶³.

33. En cuanto a los niños con trastornos mentales, SCR afirmó que no había pabellones de psiquiatría para ellos, que eran internados en pabellones psiquiátricos para adultos sin ninguna supervisión y sedados, lo que entrañaba el riesgo de que fueran agredidos e intimidados por pacientes adultos⁶⁴. El Centro para Recursos Jurídicos (CRJ) señaló que era difícil determinar el número exacto de niños con discapacidad mental, así como el tipo de atención o el número de instituciones en los que estaban internados, y que esas cifras no estaban claramente reflejadas en las estadísticas oficiales⁶⁵.

34. SCR señaló que las estadísticas ponían de manifiesto una situación más y más preocupante en cuanto al consumo de drogas en Rumania. Si bien antes se consumían drogas como la marihuana, se ha pasado a consumir directamente heroína por vía intravenosa. La edad de los consumidores se ha reducido considerablemente. Con arreglo a la investigación llevada a cabo por SCR en 2004-2005, el 4% de los niños de 11 a 18 años de edad han consumido drogas. Los niños residentes en grandes ciudades, especialmente los varones, son los más expuestos. SCR destacó que había pocos centros donde se administraba el tratamiento con metadona y que, pese a la existencia de servicios para tratar la adicción física, la intervención no era constante en el caso de la adicción psicológica que produce el consumo de drogas⁶⁶.

35. En su presentación conjunta, el Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) y el Centro Romaní de Intervención y Estudios Sociales (RCRISS) expresaron su preocupación por la existencia de una pauta de desahucio forzoso y de amenaza de desahucio forzoso de los romaníes, que entrañaba la segregación racial en varias localidades⁶⁷. El RCRISSE informó de casos recientes de violaciones del derecho de los romaníes a la propiedad y de demolición arbitraria de sus hogares. Aunque las decisiones de las autoridades locales tuviesen primacía sobre la Ley N° 50/1991, sus acciones eran ilícitas y no respetaban las disposiciones de esa ley. El RCRISSE también señaló que en los últimos años se había desahuciado y realojado a romaníes en lugares cercanos a vertederos de basura, plantas de tratamiento de aguas residuales o zonas industriales en las afueras de la ciudad. El RCRISSE señaló en el período 2005-2007 diez casos de violación de derechos a la vivienda por

las autoridades públicas en que concurrían circunstancias como el desahucio forzoso, el racismo ambiental y la segregación residencial. El RCRISS señaló que en 2007 se creó un grupo de trabajo mixto para mejorar las condiciones de vivienda de los romaníes, promovido por el Ministerio de Fomento, Obras Públicas y Vivienda⁶⁸.

36. La STP señaló que muchos romaníes vivían en alojamientos precarios, en asentamientos y comunidades aislados; también para evitar la discriminación. Según las estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia citadas por la STP, casi un tercio de los romaníes viven en asentamientos únicamente para ellos, muchos de los cuales no son oficiales o son ilícitos⁶⁹.

37. La STP afirmó que la pobreza material era tanto causa como efecto de la exclusión social y económica. La tasa de pobreza de los romaníes en el noreste de Rumania es un 50% superior a la tasa media. Según informaciones del Banco Mundial para 2003 citadas por la STP, los romaníes representan el 2,5% de la población total de Rumania; sin embargo, el 7% de los pobres y el 12,5% de los que viven en condiciones de extrema pobreza son romaníes⁷⁰.

8. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

38. SCR afirmó que la reforma del sistema educativo nacional fue rápida, pero tuvo efectos no siempre positivos. Los principales problemas del sistema educativo obedecen a la inestabilidad de las medidas adoptadas, a la escasa motivación financiera de los profesores y a las grandes diferencias entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a las condiciones materiales y la tasa de matrícula. La mala situación económica de numerosas familias y las ideas de los alumnos y los padres de familia en lo tocante a la educación contribuían a que la tasa de deserción escolar fuese alta⁷¹. Según la investigación llevada a cabo por el Open Society Institute en 2006 y citada por SCR, en la cultura romaní las familias generalmente alientan a las muchachas a abandonar la escuela antes que los muchachos⁷².

39. En cuanto a la educación, la STP señaló que los romaníes seguían siendo víctimas de discriminación. En comparación con los niños de la misma edad de la población mayoritaria, los niños romaníes registran unas tasas de analfabetismo considerablemente superiores. Como promedio, también asisten a la escuela menos años y en muchos casos se los envía automáticamente a centros escolares con tasas superiores de matrícula de romaníes. Varios estudios muestran que hay una segregación de hecho en el sistema educativo. En Rumania se considera que un centro está "segregado" cuando más de la mitad de los alumnos son romaníes. En las zonas rurales la segregación está más extendida. Debido a este sistema de segregación, los niños romaníes tienen desventajas graves para su integración social y adelanto⁷³.

40. Según el RCRISS, aunque la legislación por la que se prohíben las escuelas segregadas se aprobó en julio de 2007, las disposiciones jurídicas relativas a la segregación no son suficientes para erradicar este fenómeno. Pocos directores de centros escolares conocen esa legislación. Aunque no es una política oficial, la práctica de la segregación es una realidad, que da lugar a una disfunción educativa y social, en particular en lo referente a la calidad desigual de la educación⁷⁴. Se sigue educando a los niños discapacitados principalmente de forma segregada, aunque se hacen esfuerzos considerables para integrarlos en el sistema educativo general⁷⁵. SCR afirmó que la tasa de matrícula de los niños romaníes es muy inferior al promedio nacional. Asimismo, todavía no se promueve suficientemente la educación multicultural; el número de clases en idioma romaní es escaso⁷⁶. HRW señaló que más de 7.200 niños y jóvenes romaníes vivían con el VIH -el grupo más grande de todos los países europeos. Menos del 60% de los niños romaníes que viven con el VIH cursan algún tipo de estudios. Los niños escolarizados corren el riesgo del ostracismo, del abuso e incluso de la expulsión si se llega a conocer su condición de persona con VIH⁷⁷.

9. Minorías y pueblos indígenas

41. En 2005, el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa observó que las medidas especiales adoptadas para promover la plena y efectiva igualdad de las personas pertenecientes a minorías nacionales habían dado resultado en varias esferas, en particular la educación, el uso de lenguas minoritarias en el ámbito público y la participación en la toma de decisiones. Representantes de minorías nacionales reconocen la existencia de un clima social favorable a la tolerancia y al diálogo intercultural y coinciden en que se han realizado progresos en este aspecto⁷⁸. Amnistía Internacional destacó que a febrero de 2008 el Parlamento aún no había aprobado el proyecto de ley sobre la protección de minorías étnicas⁷⁹.

42. Según la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO), la minoría húngara representa aproximadamente el 6,6% del total de la población de Rumania. Las reivindicaciones de la minoría húngara se han centrado en varias cuestiones: restitución de los bienes eclesiásticos confiscados por el régimen comunista, el derecho a utilizar su lengua materna en su administración pública y sus tribunales, el derecho a hacer todos sus estudios en su lengua materna, y una autonomía local limitada en las regiones en las que son mayoría⁸⁰.

10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

43. La ECRI observó que los programas encaminados a facilitar la integración de los solicitantes de asilo y los refugiados en la sociedad rumana prácticamente no recibían financiación pública⁸¹.

11. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

44. Según Amnistía Internacional, hay pruebas contundentes de que en el territorio rumano tal vez se haya instalado un centro de detención de otro país en el que se detenía secretamente a personas al margen del estado de derecho y que esas personas ilícitamente privadas de su libertad entraban por vía aérea o sobrevolaban el territorio de Rumania. Amnistía Internacional también denunció que agentes del Estado rumanos conocían, o habían consentido o facilitado, esas violaciones de los derechos humanos⁸². La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) destacó que las informaciones de que los servicios de inteligencia de otro país tienen centros secretos de detención en países europeos, entre ellos Rumania, fueron confirmadas por los resultados de la investigación llevada a cabo por el senador Dick Marty por encargo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa⁸³.

45. Según la CIJ, el Gobierno de Rumania ha negado categóricamente que en el territorio de Rumania hayan tenido lugar entregas de personas o detenciones secretas y se ha remitido a las investigaciones internas de esas denuncias llevadas a cabo por las autoridades rumanas competentes. La investigación, cuyo informe final se publicó en marzo de 2007, llegó a la conclusión de que no había pruebas de que alguna aeronave de dichos servicios de inteligencia con pasajeros para ser entregados hubiese aterrizado en Rumania o sobrevolado el territorio de este país, ni de que alguna autoridad de Rumania hubiese podido participar, a sabiendas o por omisión o descuido, en alguna operación ilícita de transferencia de detenidos en el territorio de Rumania y que no existía instalación alguna en la base Mihail Kogalniceanu que hubiese podido utilizarse para la detención de personas. La CIJ señaló que se había puesto en duda la validez de las investigaciones llevadas a cabo por el Senado⁸⁴.

46. La CIJ instó a Rumania a que ordenase una investigación independiente y transparente con plenas facultades para exigir la comparecencia de personas y la presentación de documentos, para investigar las denuncias de participación de funcionarios rumanos en las entregas y la detención secreta. También recomendó a Rumania que velase por la depuración de responsabilidades, en particular, por vía penal cuando procediese, de las personas responsables de las entregas y la detención secreta en territorio rumano y adoptase medidas para la reparación de las víctimas de las entregas y la detención secreta en Rumania⁸⁵.

III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

47. La ECRI observó que desde 2002 se han realizado progresos en varias esferas. Rumania ha hecho una declaración en virtud del artículo 14 de la CERD. Las autoridades de Rumania han aprobado una ley de lucha contra la discriminación y creado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación. Además, el Código Penal de Rumania ha sido reformado para incluir, entre otras cosas, disposiciones contra el odio racial. En el marco de la Estrategia para mejorar la situación de los romaníes, las autoridades han elaborado una serie de programas a fin de que los miembros de la comunidad romaní estén en pie de igualdad con el resto de la población. También proporcionaron cursos de formación sobre la discriminación a miembros del poder judicial y la policía⁸⁶.

48. La ICAR señaló que en diciembre de 2006 el Presidente de Rumania fue el primer jefe de un antiguo Estado comunista en hacer una declaración política oficial en la que se condenaban los crímenes cometidos por el antiguo régimen comunista y en la que se presentaban disculpas oficiales a sus víctimas⁸⁷.

IV. PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES ESENCIALES

n.a.

V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA

n.a.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council.)

Civil society

ACCEPT, IGLHRC and ILGA	ACCEPT, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and the European Region of the International Lesbian and Gay Association* (ILGA), Joint UPR Submission, February 2008
AI	Amnesty International*, London, United Kingdom, UPR Submission, February 2008
CLR	Centre for Legal Resources, Bucharest, Romania, UPR Submission, February 2008
COHRE and RCRISS	Centre on Housing Rights and Evictions* and the Roma Centre for Social Intervention and Studies, Geneva, Switzerland, Joint UPR Submission, February 2008
HRW	Human Rights Watch*, New York, United States, UPR Submission, February 2008

HRWF	Human Rights Without Frontiers, Brussels, Belgium, UPR Submission, February 2008
ICAR	Foundation and the Association of Former Political Prisoners, Bucharest, Romania, UPR Submission, February 2008
ICJ	International Commission of Jurists*, Geneva, Switzerland, UPR Submission, February 2008
IRPP	Institute on Religion and Public Policy, Washington D. C., United States, UPR Submission, February 2008
ITUC	International Trade Union Confederation*, Brussels, Belgium, UPR Submission, February 2008
CRISS	Roma Centre for Social Intervention and Studies, Bucharest, Romania, UPR Submission, February 2008
SCR	Save the Children* Romania, Bucharest, Romania, UPR Submission, February 2008
SIRDO	Romanian Independent Society of Human Rights*, UPR Submission, February 2008
SOSCVR	SOS Children's Villages* Romania, UPR Submission, February 2008
STP	Society for Threatened Peoples*, Göttingen, Germany, UPR Submission, February 2008
UNPO	Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague, Netherlands, UPR Submission, February 2008

Regional intergovernmental organization

OSCE RFOM	Organization for Security and Co-operation in Europe, Representative on Freedom of the Media, UPR Submission, February 2008
CoE	Council of Europe, February 2008, submission consisting of <ul style="list-style-type: none">- Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, adopted on 24 November 2005, ACFC/OP/II(2005)007- Resolution CM/ResCMN(2007)8 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Romania (Adopted by the Committee of Ministers on 23 May 2007 at the 996th meeting of the Ministers' Deputies)- European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, 24 June 2005, CRI (2006) 3- Report of Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to Romania, 5-9 October 2002, CommDH(2002)13- Follow Up Report on Romania (2002-2005), Assessment of the progress made in implementing the recommendations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, CommDH (2006)7- Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif aux visites effectuées en Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du 16 au 25 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003, CPT/Inf (2004) 10- Réponse du Gouvernement de la Roumanie au rapport du CPT, CPT/Inf (2004) 11- Letter to Secretary General transmitting the response of the Romanian Government on the second part of the investigation initiated by the Secretary General of the Council of Europe, in accordance with Article 52 of the European Convention on Human Rights, 6 April 2006

- Response of the Romanian Government on the second part of the investigation initiated by the Secretary General of the Council of Europe, in accordance with Article 52 of the European Convention on Human Rights, 20 February 2006
- Table of pending cases against Romania

² Amnesty International, p. 1.

³ Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, p. 1.

⁴ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 1

⁵ Save the Children Romania, p. 1

⁶ SOS Children's Villages Romania, p. 1

⁷ Amnesty International, p. 1

⁸ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 1

⁹ Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, p. 1.

¹⁰ Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, p. 6.

¹¹ Amnesty International, p. 2.

¹² Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, p. 1. See also Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, p. 6.

¹³ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 5.

¹⁴ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 1.

¹⁵ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 1.

¹⁶ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 3.

¹⁷ Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, p. 37.

¹⁸ Amnesty International, p. 2.

¹⁹ Amnesty International, p. 3.

²⁰ Society for Threatened Peoples, p. 3.

²¹ Save the Children Romania, p. 2.

²² Romanian Independent Society of Human Rights, p. 3.

²³ Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, p. 6.

²⁴ Human Rights Watch, p. 3.

²⁵ Human Rights Watch, p. 4.

²⁶ Human Rights Watch, p. 5.

²⁷ Human Rights Watch, p. 4

²⁸ Joint submission 1: ACCEPT, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and the European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), p. 4.

²⁹ Amnesty International, p. 3.

³⁰ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 2.

³¹ Romanian Independent Society of Human Rights, p. 2.

³² Report of Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to Romania, 5-9 October 2002, p. 17.

³³ Amnesty International, p. 4.

- ³⁴ Centre for Legal Resources, p. 4.
- ³⁵ Amnesty International, p. 4.
- ³⁶ Save the Children Romania, p. 2.
- ³⁷ Save the Children Romania, p. 1.
- ³⁸ Save the Children Romania, p. 3.
- ³⁹ Joint submission 1: ACCEPT, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and the European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), p. 5.
- ⁴⁰ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 3.
- ⁴¹ Foundation and the Association of Former Political Prisoners, p. 1.
- ⁴² Foundation and the Association of Former Political Prisoners, p. 3.
- ⁴³ Save the Children Romania, p. 3.
- ⁴⁴ Romanian Independent Society of Human Rights, p. 3.
- ⁴⁵ Joint submission 1: ACCEPT, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and the European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), p. 5.
- ⁴⁶ Organization for Security and Co-operation in Europe, Representative on Freedom of the Media, p. 1.
- ⁴⁷ Institute on Religion and Public Policy, p. 1.
- ⁴⁸ Human Rights Without Frontiers, p. 2-3.
- ⁴⁹ Institute on Religion and Public Policy, p. 2-3.
- ⁵⁰ Human Rights Without Frontiers, p. 2-3.
- ⁵¹ Institute on Religion and Public Policy, p. 2-3.
- ⁵² Amnesty International, p. 5.
- ⁵³ Joint submission 1: ACCEPT, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and the European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), p. 3.
- ⁵⁴ International Trade Union Confederation, p. 1.
- ⁵⁵ International Trade Union Confederation, p. 1.
- ⁵⁶ Save the Children Romania, p. 2.
- ⁵⁷ SOS Children's Villages Romania, p. 1-2.
- ⁵⁸ Save the Children Romania, p. 4.
- ⁵⁹ SOS Children's Villages Romania, p. 1.
- ⁶⁰ Romanian Independent Society of Human Rights, p. 3.
- ⁶¹ Report of Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to Romania, 5-9 October 2002, p. 17.
- ⁶² SOS Children's Villages Romania, p. 2.
- ⁶³ Save the Children Romania, p. 3.
- ⁶⁴ Save the Children Romania, p. 3.
- ⁶⁵ Centre for Legal Resources, p. 3.
- ⁶⁶ Save the Children Romania, p. 4.
- ⁶⁷ Centre on Housing Rights and Evictions, p. 8.
- ⁶⁸ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 4. See also Society for Threatened Peoples, p. 2.
- ⁶⁹ Society for Threatened Peoples, p. 2.
- ⁷⁰ Society for Threatened Peoples, p. 3.

⁷¹ Save the Children Romania, p. 4.

⁷² Save the Children Romania, p. 2.

⁷³ Society for Threatened Peoples, p. 1.

⁷⁴ Roma Centre for Social Intervention and Studies, p. 3.

⁷⁵ Save the Children Romania, p. 4.

⁷⁶ Save the Children Romania, p. 4.

⁷⁷ Human Rights Watch, p. 1-2.

⁷⁸ Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second Opinion on Romania, p. 36.

⁷⁹ Amnesty International, p. 2.

⁸⁰ Unrepresented Nations and Peoples Organization, p. 1.

⁸¹ Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, p. 6.

⁸² Amnesty International, p. 1-2.

⁸³ International Commission of Jurists, p. 1.

⁸⁴ International Commission of Jurists, p. 2-3.

⁸⁵ International Commission of Jurists, p. 4. See also Amnesty International, p. 1-2.

⁸⁶ Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance, Third report on Romania, p. 6.

⁸⁷ Foundation and the Association of Former Political Prisoners, p. 2.
